

Los retos de la transición democrática en América Latina. El caso de Chile

A la memoria de Don Carlos Morales A.

Teresa Castro Escudero

"no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos... Sigán ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre..." Salvador Allende, 11 de septiembre de 1973.

El triunfo de Patricio Aylwin candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, en la primera vuelta de la contienda electoral del 14 de diciembre de 1989, por medio de una holgada mayoría (55.17% de los votos frente a los 29.40 de Hernán Büchi), aunque esperado, echó por tierra la remota esperanza que albergaban los sectores gobiernistas de celebrar una segunda vuelta o por lo menos una votación más cerrada que diera mayor capacidad de maniobra al gobierno de facto hoy saliente a medias.

El plebiscito del 5 de octubre de 1988 —cuando se inicia la debacle de la dictadura militar— y las elecciones de 1989 que se realizan en el marco, tiempos y plazos de la constitución pinochetista de 1980 se convierten en derrotas masivas para la dictadura, y abren un proceso que puede revertir los objetivos perseguidos por Pinochet y sus adláteres y que son proyectar el actual orden socioeconómico y político hacia el futuro. Es decir, la institucionalidad autoritaria cayó en su propia trampa, pero la constitución de 1980 impone un conjunto de ataduras, cadenas y candados al nuevo proceso de transición democrática que es necesario analizar.

Se inicia el difícil tránsito a la democracia, y eso lo saben bien los chilenos, quienes sin embargo no dejaron de salir de nuevo a las calles para manifestar júbilo y esperanza porque recuperaron su derecho a elegir.

El caso chileno guarda diferencias y particularidades importantes en el contexto de los países de Sudamérica que enfrentan procesos de democratización similares, nos proponemos entonces apreciar esas diferencias mencionando algunos proble-

mas y dilemas, tanto teóricos como prácticos que con sus diferentes énfasis, ritmos e intensidades, enfrentan Brasil, Argentina y Uruguay y que sin duda enfrentará también el nuevo gobierno democrático en Chile.

I. Transiciones a la democracia en Brasil, Argentina y Uruguay: Lecciones para Chile.

Los recientes procesos de transición a la democracia¹ abren un nuevo capítulo en la sociología y la ciencia política contemporáneas frente a la necesidad de establecer vías e instrumentos teóricos y analíticos adecuados a realidades tan cambiantes y en algún sentido inéditas. Las mismas ciencias sociales se inscriben de manera especial en este proceso, debido a que también su rezago y crisis son producto de esas largas y prolongadas dictaduras.

Con respecto a los procesos de transición a la democracia, se puede decir que el ámbito de los problemas comunes gira en torno a la posibilidad de construir bases sólidas para un gobierno democrático y la capacidad de proponer e impulsar un modelo alternativo de sociedad que sea viable.

Este modelo alternativo además de ofrecer espacios de participación y expresión de los distintos intereses de la sociedad, incluyendo los de las fuer-

¹ No vamos a discutir en este espacio la complejidad teórica y analítica que guarda el problema de la transición a la democracia en América Latina, dada la diversidad de situaciones de regímenes considerados como autoritarios. En este artículo analizamos las llamadas transiciones no revolucionarias a partir de dictaduras militares (o Estados Burocráticos-Autoritarios) que surgen en aquellos países social y políticamente más desarrollados y modernos como son los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, ver O'Donnell, Guillermo, "Introducción a los casos latinoamericanos" en O'Donnell, Schmitter y Wittehead (comp) *Transiciones desde un gobierno autoritario*. América Latina, tomo 2, Paidós, B. Aires, 1988. Esta diferenciación nos parece útil para distinguir dictaduras donde las FFAA ejercen el poder en tanto corporación y no a través de caudillos u otras formas de militarismo tradicional, donde se plantean problemas distintos.

* También sin entrar a la discusión sobre las distintas perspectivas teóricas con que se analizan estos regímenes.

zas armadas y grupos de poder del Ancien Regime, enfrenta la necesidad de satisfacer las demandas sociales postergadas y todo esto sin caer en la hoy tan temida "ingobernabilidad".²

Aunque las causas varían el origen de estos procesos de transición democrática en Brasil, Argentina y Uruguay, no son producto de la derrota del autoritarismo, sino de una concertación "desde arriba" entre las cúpulas civiles y fuerzas armadas, lo que de suyo es un obstáculo para el proceso democratizador dado el precario equilibrio de fuerzas que a cada palabra o acción se teme derrumbar como castillo de naipes.

En estos procesos negociados, las fuerzas armadas han impuesto por lo menos dos condiciones fundamentales: la continuidad del modelo económico de corte neoliberal, y la negativa rotunda a juicios contra militares violadores de los derechos humanos. Expresión de esta última condicionalidad es la ley de "punto final", o aquí no ha pasado nada en Argentina, donde la llamada "guerra sucia" adquirió las proporciones de genocidio y, el plebiscito para sancionar la llamada "ley de impunidad" en Uruguay.³

No se trata de desconocer el hecho de que los años de dictadura militar transformaron necesariamente a las fuerzas armadas politizándolas y modificando, de manera radical, la relación Estado-fuerzas armadas-sociedad civil, ni el que las fuerzas armadas tienen que reinsertarse en la sociedad democrática que se pretende.

La cuestión es cómo se concibe este importante problema y cómo se pretende enfrentarlo. Uno de los requisitos fundamentales para una transición democrática plena es que esta reinsertación se dé sobre la base del "desmonte" del poder militar, de

² Por gobernabilidad se entiende la capacidad de instituciones y movimientos de movilizar las energías del cuerpo social hacia objetivos definidos y compartidos, "sin contravenir al mismo tiempo, las reglas consensuales del juego político". La ingobernabilidad sería la incapacidad de actuar de esta manera, y con esto el caos, la inestabilidad y la amenaza al buen orden, de acuerdo a una visión restringida y elitista, a mi modo de ver, de lo que es la democracia, como conjunto de procedimientos y reglas del juego para garantizar la participación de distintos grupos de interés organizados en la sociedad y la relación entre representantes y representados. (Bobbio), ver Rial, Juan "Gobernabilidad, Partidos y Reforma Política en Uruguay" *Revista Mexicana de Sociología* 2/88, jun. 1988.

³ En el caso argentino, el 7 de octubre de 1989, el Presidente Carlos Saúl Menem firmó un controvertido indulto para exculpar a militares acusados de "excesos" represivos y violación de los derechos humanos, el cual fue calificado de grave error político de golpe cruel a la democracia y de inconstitucional, por interferir en el poder judicial que aún no juzgaba a los indultados. Oponerse al indulto no significa "dureza de corazón", como dice la Iglesia, sino la duda justificada de que la medida realmente aleje la posibilidad de nuevos golpes de Estado, pues deja intacta la maraña de relaciones entre las cúpulas civiles y militares que se han desarrollado desde el golpe contra Irigoyen en 1930. Con respecto a Uruguay, si bien el plebiscito del 16 de abril de 1989 sanciona la ley de impunidad, en realidad no se resuelve la "cuestión militar" pues el voto en contra de dicha ley fue de los sectores más jóvenes, de los sectores más comprometidos políticamente, los mismos que en noviembre pasado dieron el triunfo al Frente Amplio en Montevideo, la estratégica capital uruguaya.

la desmilitarización del Estado y de la sociedad, de la subordinación militar al poder civil.

La amnistía ahora otorgada en realidad no ha solucionado sino sólo pospuesto el problema militar, y más bien parece una política de avestruz que ante el temor de una reactivación del poder militar, lo deja intacto. Este espinoso problema tendrá que ser enfrentado por el nuevo gobierno democrático también en Chile, como veremos más adelante.

Otro elemento común es que los procesos de transición a la democracia se inscriben en un contexto de crisis económica sin precedentes, agravada en los últimos años con el problema de la deuda externa. Los años ochenta son considerados la década perdida para América Latina en su conjunto (aunque según un funcionario del gobierno militar chileno, para su país no hubo tal década perdida) debido al grave retroceso económico, la caída estrepitosa de los niveles de vida, el peso crítico de la deuda externa, entre otros factores.

En este contexto, la continuidad del modelo económico neoliberal por parte de los nuevos gobiernos democráticos es un elemento generador de crisis e inestabilidad permanente. La reinsertación de América Latina en el Mercado Mundial, en una nueva fase de acumulación se da sobre la base de una virtual "desindustrialización", de economías volcadas de nuevo hacia afuera, mucho más desiguales, subordinadas y dependientes.⁴

Asimismo la fragilidad de los actuales pactos democráticos de los países analizados descansa, en nuestra opinión, en la falta de una base social organizada, en la ausencia de un movimiento popular orgánico que le dé otro contenido a dichos procesos.

Esta situación también es producto de años de vigencia de dictaduras militares que han buscado una reestructuración socioeconómica y política

⁴ Sobre el problema de la deuda, viene prevaleciendo la visión impuesta por Estados Unidos y los bancos de los países acreedores, la negociación bilateral, y el desaliento a la formación de un marco de negociación regional que inhibe aún más la capacidad de respuesta de los países latinoamericanos como conjunto, en un mundo en el cual emergen nuevos bloques de poder pero en el cual también se replantean viejas hegemonías, como en la dramática invasión norteamericana a Panamá el 20 de diciembre de 1989, frente a la cual la respuesta iberoamericana ha sido más bien tibia. Necesariamente la fragilidad de las relaciones de poder que se dan al interior de nuestros países se expresa en la falta de proyección externa de un liderazgo firme y no sometido a presiones y chantajes de la política regional del gran garrote que retoma la administración Bush. Pero lo más grave de todo es que se le abre la puerta a la agresiva política exterior norteamericana y su concepción —bastante mezquina— de lo que es la democracia, lo cual, junto con la dependencia financiera, se convierte en una amenaza directa contra todo proceso que tendiera a profundizar el proceso democrático o a radicalizarlo. Esto podría ser enfrentado por Estados Unidos como en los viejos tiempos por medio de sus programas de "desestabilización" —guerra económica, política e ideológica como en Chile y Panamá y complementados con la posibilidad de invasión directa y desembarcada—. Para una discusión más detallada sobre la política exterior norteamericana, ver Saxe Fernández, John, *De la Seguridad Nacional*, Grijalbo, México, 1975.

férrea que busca una verdadera refundación de las sociedades latinoamericanas, sobre la base del actual modelo neoliberal.

Independientemente de que se hayan logrado o no tales objetivos terminales, este modelo económico ha modificado necesariamente la estructura social, acentuado las diferencias, polarizado a la sociedad y modificado radicalmente las bases sociales sobre las que se sustentaban formas de organización, modelos y proyectos políticos de las sociedades previas al advenimiento de las dictaduras militares.

El impacto del modelo neoliberal se ha traducido internamente en la disminución de la clase obrera industrial, el aumento del sector terciario (servicios), la creciente marginalidad de amplios sectores, base de la llamada economía "informal" y, como contraparte, el surgimiento de un reducido sector vinculado al gran capital nacional y extranjero, que concentra la riqueza y los beneficios de un modelo que fomenta la especulación sobre las actividades productivas y se basa en formas de explotación más reducidas, dado el deterioro salarial y la débil capacidad organizativa de una mano de obra fragmentada en extremo.

Además de los cambios de tipo socioeconómico hay que mencionar el "redimensionamiento" del Estado, su privatización y achicamiento, lo que en términos económicos significa reducir su presencia a la mínima expresión en aras de que las "leyes del mercado" regulen la actividad económica, lo que en términos políticos significa que el Estado no representa más el interés general y fortalece en cambio su capacidad coercitiva y represiva.⁵

Según Guillermo O'Donnell⁶ cuando ha existido un alto grado de militarización del régimen autoritario, las dificultades de la transición se incrementan en por lo menos dos aspectos:

- a) En lo concerniente a las repercusiones, durante el nuevo régimen democrático, de la represión aplicada por el gobierno autoritario.
- b) En lo referente a la amplia gama de beneficios e instituciones que las fuerzas armadas habitualmente "conquistaron" durante un régimen altamente militarizado.⁷

⁵ Ugo Pipitone, comentando una ponencia de Marcos Kaplan, señala que enfrentadas a la crisis y políticas económicas conservadoras, las sociedades latinoamericanas de los años ochenta sufren procesos de "desplietarización", desempleo y creciente marginalidad. La consecuencia es el debilitamiento de la cohesión social interna de los grupos con posibilidad de impulsar la democracia. Así, el neoliberalismo, en nombre de la sociedad civil, desorganiza nexos de solidaridad horizontales y sistemas de identidad colectiva, y al mismo tiempo fortalece las estructuras del Estado, centralizando sus funciones de control; junto con la desorganización de la sociedad y la reorganización del Estado, se debilita la función de los partidos políticos en tanto instrumentos de participación social, y se ensanchan las distancias entre el Estado y Sociedad, ver *La Jornada*, 26 sep. 89, p. 31.

⁶ O'Donnell, Guillermo, "Introducción..." *op. cit.*

Fernando Henrique Cardoso, por su parte, señala que los efectos de la represión, aunados a los cambios en la estructura social, inhiben el surgimiento de movimientos fuertes que fueran capaces de alterar de manera radical el orden autoritario.

...en la transición política no parecen estar presentes ni una democracia iluminada ni una revolución social. En el mejor de los casos, lo que tiene lugar es una liberalización relativa con muchos conflictos sociales y escasa obtención efectiva de espacios democráticos que permitan a los trabajadores y al pueblo en general orientar sus acciones, y aún menos, participar significativamente en la construcción de su propio destino y del destino social colectivo.⁸

Los últimos procesos electorales vividos en Argentina, Uruguay y Brasil el año pasado, plantean la perspectiva de cambios en este panorama, no sólo porque el mismo proceso de transición ha movido a nuevos actores sino por lo que parece ser la recuperación de la capacidad protagónica de la izquierda. La importante votación obtenida por esas fuerzas en Brasil, Uruguay y Chile, así lo parecen indicar.

Los primeros recambios electorales en el marco del proceso de transición, más que señalar el fin del periodo inician otra fase de ese mismo proceso, mucho más compleja y difícil, pues se caracteriza por un conjunto de contradicciones exacerbadas por el tipo de transición fincada en pactos precarios, falta de efectiva participación popular, incapacidad de trascender la fragmentación social y política, atraso ideológico y, en fin, la herencia de la dictadura, todo lo cual es un serio riesgo para la transición.⁹

⁷ Las consecuencias que la militarización de la sociedad tiene en el terreno económico son otra dimensión del poder militar. En el caso chileno, Frida Modak comenta un estudio muy interesante sobre este problema aparecido en *Análisis* y realizado por Carlos Huenus y Jorge Olave, donde al respecto señala que el control del ejército chileno en el área económica no sólo se da a nivel de subsecretarías, sino que la Corporación de Fomento, CORFO, es territorio militar, donde puestos de vicepresidencia, gerencias y directorios, también de filiales de la CORFO, están en manos del ejército, ver *El Día*, 27 de sep. 1988 p. 4.

⁸ Cardoso, Fernando Henrique "¿Transición en América Latina?" en varios autores *Los Límites de la Democracia*, vol. 2, Clicso, B. Aires, 1985, p. 141.

⁹ La falta de una rearticulación profunda entre Estado-Sociedad Civil, sobre la base de una actividad eficaz de los llamados "cuerpos intermedios" —organizaciones sindicales, partidos políticos—, implica riesgos muy serios para la democracia a la que se aspira, debido a que necesariamente se cae en estructuras de poder verticalistas y autoritarias, como en el caso español en donde se ha tendido a un ejercicio del poder cada vez más cupular, aislado, corporativizado, por parte de un PSOE desgastado y como correlato de una sociedad poco participativa. Otro riesgo es que la impugnación social se manifieste de manera explosiva, pero inconsecuente, inorgánica —ahí está la huelga general del 14 de diciembre de 88 que sólo preocupó a Felipe González—, ver Blas Matamoro, *Vuelta* núm. 148). También Juan A. Ortega (*Cambio 16905*) señala el problema de la personalización del poder en los partidos —en España— que lejos de asentarse en una amplia militancia, funcionan literariamente "colgados" de un líder cuyo éxito o fracaso arrastra a fondo el partido. El caso español es sin duda, y guardando las diferencias, un buen ejemplo comparativo.

En el caso de Brasil, Cardoso, en el artículo ya citado señala que en ese país se da una transición gradual y controlada, o más bien una "liberalización" es decir, mayores libertades, garantías individuales, etc., pero no una democratización. Además de la desmovilización popular lograda, el elemento explicativo es el tipo de dictadura militar que en Brasil, a diferencia de otras dictaduras permitió que el Congreso siguiera funcionando, aunque de manera intermitente y limitada, con elecciones y partidos políticos, aunque en un marco autoritario.

Los militares brasileños mantuvieron también los rudimentos de una sucesión constitucional eligiendo generales como presidente cada cinco años; por ello existe continuidad en la ulterior fase de transición controlada.

En Brasil hay, desde luego, varias coyunturas importantes como las que se dan en torno a los fracasados planes de estabilización y renegociación de la deuda y alrededor de la discusión y aprobación de la nueva Constitución, mismos que no podemos discutir aquí, pero que sin duda son elementos que van desgastando al gobierno de Sarney y modifican la correlación de fuerzas, agotando así esa primera fase de transición caracterizada por Cardoso como gradual y controlada.

El pasado 15 de noviembre por primera vez en 29 años, se celebraron en Brasil elecciones directas para elegir presidente, luego del periodo dictatorial. La participación de los sufragantes —82 millones 57 mil 634 brasileños, de los cuales el 70% votaría por primera vez—, en esta primera vuelta fue masiva: un proceso inicialmente instrumentado "desde arriba" que, sin embargo, se ve enfrentado a movilizaciones populares que exigen la plena democratización y un modelo socioeconómico más justo y equilibrado.

En ese marco a decir de Sergio Pineda,¹⁰ el comportamiento del electorado, inédito por muchas razones, destrozó el viejo cuadro político electoral que habría resistido incluso a las dictaduras y, arrasó con los partidos puntales del régimen de Sarney. "Esta rebelión electoral arroja, además, una novedosa relación de fuerzas con una izquierda que aglutinó a más del 45 por ciento del electorado".

Si bien en la segunda vuelta el triunfo fue para el candidato de la derecha populista y su proyecto neoliberal, hay que colocar dicho triunfo entre comillas, porque no sólo el avance de las fuerzas de izquierda y centro izquierda ya modificaron la correlación de fuerzas sino porque Collor de Mello triunfó con el voto de las zonas más empobrecidas y de los sectores más atrasados y marginados. Lula, en cambio incitó el voto urbano popular,

intelectual, obrero. Y esto abre otra perspectiva para el pueblo brasileño.

El pasado 26 de noviembre de 1989 Uruguay vivió también una importante jornada electoral. Se trató de las primeras elecciones libres —es decir, sin proscripciones como en las de 1984— desde el retorno a la democracia hace cinco años. En 1984, con vetos y todo, lo importante no fueron los elementos programáticos, sino salir de la dictadura. Hoy el marco es muy distinto al que privaba entonces y lo que quiere la sociedad uruguaya es un verdadero proyecto alternativo, además de viable.

Las elecciones de 1989 en las que triunfó Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional (blanco) condensan tres hechos notables que son la debacle del gobernante Partido Colorado; el triunfo como alcalde de Montevideo de Tabaré Vázquez, de la coalición de izquierda del Frente Amplio y, lo que parece ser el fin del bipartidismo, que ha dominado la vida política uruguaya prácticamente desde el siglo pasado.¹¹

En estos casos la primera fase de la transición ha modificado entonces la correlación de fuerzas, y exacerbado las contradicciones ya señaladas del modelo económico y político continuado hasta ahora. Queda claro que los partidos progresistas en el poder se han desgastado en ese contexto (incluyendo, en el caso brasileño, al partido de "Lula") y que la sociedad exige un cambio (que ni Menem, ni Collor de Mello ni Lacalle parece que vayan a ser capaces de impulsar).

Para Juan Rial, tanto en Uruguay como en Brasil y Argentina, se repitió un fenómeno típico de los procesos de transición de la dictadura a la democracia: los partidos en el gobierno debieron pagar los costos políticos derivados de los años de dictadura, y se vieron seriamente impugnados en las elecciones posteriores a la transición.¹²

2. El caso de Chile

Señalábamos al principio de este trabajo que tanto el plebiscito de 1988 como el actual proceso electoral con que se comienza el proceso de transición a la democracia en Chile, se realizan en el marzo de la institucionalidad autoritaria que bus-

¹¹ Una tercera fuerza que vino a cuestionar de manera radical al sistema bipartidista desde su constitución en 1971, ha sido el Frente Amplio. Su actual triunfo en Montevideo ha sido calificado como una verdadera proeza, no sólo por haber obtenido el 35% del total de los votos en el principal centro político, administrativo e industrial, que es Montevideo además de concentrar a casi la mitad de la población (1 millón 200 mil habitantes, de un total de casi tres millones), sino porque además aumentó su electorado, a pesar de haber sufrido una seria crisis y el abandono de dos fuerzas importantes, el Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP) y el Partido Demócrata Cristiano, que constituyeron, con otras fuerzas, el llamado "Nuevo Espacio" como una "alternativa de izquierda" que no prosperó.

¹² *Excelsior*, 2 de 89.

¹⁰ Pineda, Sergio, *Excelsior*, 17 de nov. 89, p. 2.

ca condicionar también el futuro del proceso. Sin embargo la situación chilena no se enmarca, en sentido estricto, en el tipo de transiciones concertadas entre la cúpula civil y militar que hemos comentado, y no es así debido a la fuerte movilización y presencia popular en el proceso y al rígido modelo militar.

Nos parece que estos son rasgos específicos del caso chileno. La movilización popular utilizó la institucionalidad pinochetista para propinarle serias y masivas derrotas al General. Este hecho además de las características propias de este régimen militar, retarda el proceso —en relación con los otros casos—, y le imprime ahora su ritmo y formas.

Con respecto al tipo de régimen militar en Chile, Pinochet ha ejercido un poder unipersonal, centralizado, sin rotación interna como en los otros casos que examinamos donde la cúpula militar mostró más permeabilidad a las presiones que llegaban de la sociedad y una dirección más colectiva. En Chile en cambio, la estructura tan vertical y jerárquica de fuerzas armadas, su apoliticismo y separación extrema de la sociedad, favorecieron el surgimiento de esta dictadura personalizada.

El general Pinochet, además de jefe del ejecutivo, es comandante en jefe del ejército —el cual predomina sobre las otras ramas de las fuerzas armadas— y comandante en jefe de las FFAA. Pinochet no comparte las decisiones ni el mando con otros oficiales, pero esto lo ha mediado —para evitar rupturas serias— con la integración a las más altas posiciones de la administración económica y política a numerosos generales y almirantes subordinados así a Pinochet, como lo señala Maira, por una doble lealtad: militar y burocrática.¹³

Al respecto, Víctor Vfo¹⁴ también se refiere a la enredada maraña de relaciones en que Pinochet sustenta su poder: aunado a lo anterior, Pinochet decide por ejemplo a quién promueve, saltándose antigüedad y otros criterios institucionales; los organismos clave del poder están en manos del ejército —rama que además tiene mejores sueldos y equipo—, produciéndose una confusión entre su rol profesional y político, porque puestos (el de gobernador o intendente se convierten en eslabón de la carrera militar o viceversa).

De esta forma ha prevalecido la cohesión y la disciplina del cuerpo armado, a pesar del proceso de desgaste de Pinochet. Esto podría deberse a un elemento añadido por Garretón: se ha consolidado en la dirección del Estado un núcleo formado por el liderazgo político-militar personalizado en Pinochet y por el grupo tecnocrático encargado

de la conducción económica. Hay entonces una combinación de dictadura personal y régimen militar, por lo cual la sola caída de Pinochet no significaría, en sí, el fin del régimen militar.¹⁵

Sin embargo, esta virtual privatización de las fuerzas armadas, la existencia de una casta militar que la política contingente ha arrastrado lejos de sus tareas profesionales, significa una transformación profunda de las fuerzas armadas, una distorsión de la función y papel en una sociedad democrática, pues se proyectan como actores políticos permanentes, como factores de poder. El problema aquí no se resuelve con amnistías o simples vueltas a los cuarteles.

Este tipo de régimen militar es uno de los elementos importantes que ayudan a entender la larga estabilidad del régimen y su proceso de institucionalización. La Constitución de 1980, aprobada mediante un plebiscito considerado como fraudulento, en condiciones de estado de sitio y bajo estricto control militar, establece los pasos, mecanismos y etapas tendientes a estabilizar un régimen autoritario, basado en un sistema político presidencialista, de participación y representación restringida y excluyente, y con el poder tutelar de las fuerzas armadas, garantes de la continuidad del modelo.

Sin haber logrado la conformación de un solo bloque opositor a la dictadura, las distintas fuerzas políticas¹⁶ se ven enfrentadas a la inminencia del plebiscito. Luego de un largo debate y si bien bajo la iniciativa de la propia dictadura, se consigue una amplia concertación para participar en el plebiscito, pero para ganarlo, para revertirle el proceso a la dictadura.¹⁷

El triunfo del NO implica un vuelco político —semejante, a decir de Garretón, a la muerte de Franco o la derrota de Galtieri en las Malvinas—, instalándose la plena dinámica de transición que avanza hacia la Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD), que siendo uno de los arcos políticos más amplios logrados en Chile, lleva a su candidato, Patricio Aylwin, al triunfo el pasado 14 de diciembre.

3. Los "Candados" de Pinochet y el "milagro" chileno.

Decíamos que el general Pinochet ha sido muy vapuleado, pero no vencido porque decidió per-

¹⁵ Garretón, Manuel Antonio "El plebiscito chileno, *Nexos* núm. 130, oct. 88.

¹⁶ Sobre el proceso de reconstitución del movimiento popular de las organizaciones políticas y la conformación de bloques, ver nuestro artículo: "Movimiento Popular y Democracia en Chile" *Revista Mexicana de Sociología* 3/86, jul sep. 86.

¹⁷ El motivo del SI O NO era prolongar el periodo presidencial Pinochet o convocar a elecciones en diciembre de 1989, como se hizo.

¹³ Maira, Luis en varios autores "Dos debates: La democracia ahora, *Nexos*, núm. 87, marzo de 1985.

¹⁴ Vfo, Víctor. *El día*, 5 de julio 1988, p. 12.

manecer 8 años más como comandante en jefe del ejército y anunció la firme idea de continuar el proceso de institucionalización del régimen autoritario y, para eso, poco importa ya el mismo Pinochet: hay muchos sectores, civiles y militares, interesados en dicha institucionalización.

No le ha ido bien a Pinochet. Dice Víctor Vío que su gente empezó a tomar distancia —“aunque ni tan lejos que se hiele, ni tan cerca que se quemé”—, a criticar el “complejo de trascendencia” del melómano general¹⁸ pero aceptando de buen grado los candados y ataduras que Pinochet impone al proceso democrático para garantizar lo que se ha convertido en no negociable en todos los procesos de transición comentados: la continuidad del modelo económico y la impunidad de los militares y de los civiles que colaboraron con su régimen transgrediendo los derechos de terceros.

El régimen militar ha seguido dictando leyes de última hora, muchas de ellas secretas¹⁹ que van desde garantías para la conservación de los bienes del ejército, hasta la prohibición de juicios no sólo por violación a derechos humanos, sino por malversación de fondos u otras responsabilidades administrativas (por ejemplo enriquecimientos a costa del acelerado proceso de privatización económica) además de que la permanencia de Pinochet se considera una situación de irregular coexistencia de un gobierno civil con el poder militar.

Otro enclave del poder de Pinochet se constituye porque el régimen militar dejará instalados por seis años, con carácter de inamovibles, a los funcionarios ejecutivos del poderoso Consejo Nacional de Televisión que tiene como misión vigilar y fiscalizar el contenido de las emisiones, otorgar concesiones “indefinidas” para particulares e iniciar la privatización de las estaciones de televisión universitarias, así como del canal estatal, único con cobertura nacional.²⁰

Otro ámbito que se quiere dejar bien atado es el económico a fin que el modelo de desarrollo no sea modificado. Así hace unos meses entró en vigor una ley que otorga total autonomía al Banco Central respecto de las autoridades civiles, además de que sus funcionarios fueron designados por Pinochet y se piensa privatizar el Banco del Estado como parte del modelo privatizador que ha sido

intensamente acelerado.²¹

Desde luego que lo más grave de toda esta situación es que el nuevo gobierno no contará con la mayoría parlamentaria para modificarla. La ley electoral fue ideada para asegurar al régimen pinochetista cuando menos un diputado y un senador en cada localidad y región, para lo cual se realizó una división geográfica distinta de la administrativa. Así, la oposición ganó por mayoría absoluta la elección presidencial pero no así la parlamentaria.

Esta legislación mañosa afectó sobre todo a líderes de izquierda y a políticos de gran mérito y trayectoria. La composición del parlamento no representa la real correlación de fuerzas, ni se conforma según el número de votos obtenido.

Además, con la prerrogativa del régimen militar de designar a 9 senadores para el futuro parlamento, sumados a las 16 bancas de la derecha, hacen un total de 25 de frente a las 22 de la Concertación.

De esta manera, la situación no se presenta fácil para los partidos de la Concertación ni para modificar la Constitución o el sistema electoral. El mismo carácter heterogéneo de la concertación seguramente la llevará a dividirse en torno a la forma de enfrentar las tres grandes tareas del gobierno de reconstrucción nacional: la democratización de las instituciones sociales y políticas, hacer justicia en materia de derechos humanos y pagar la deuda social impulsando, simultáneamente, el progreso y la modernización.²²

Sobre este último punto, se supone, no habría tantos obstáculos dada la “excepcionalidad” de la economía chilena y su milagroso crecimiento económico. Así nos los dejan ver cifras de la CEPAL que hablan de crecimiento económico, descenso del desempleo, control de la inflación, superávits en la balanza comercial, en fin, una situación envidiable con la que se pretende demostrar el éxito del modelo neoliberal a la vez que utilizarlo como base al proceso democratizador. Sin embargo, hay

²¹ En agosto de 89 se anunció la venta parcial o total de 14 empresas fiscales, con ello se llegaba a casi 200 empresas transferidas a particulares durante el régimen. Otras 350 sociedades anónimas estatizadas durante la administración pasada, fueron devueltas en trámite rápido a sus dueños, algunos de los cuales recibieron indemnizaciones. *El Día*, 11 de septiembre de 1989, p. 12.

²² Durante 16 años de dictadura diversas organizaciones humanitarias denunciaron la existencia de más de 30 mil muertos y desaparecidos señalando que aún existen 670 presos políticos. Aylwin propone una amnistía parcial, es decir sólo para los considerados presos de “conciencia” y no de “sangre”, lo cual no es considerado justo por algunos sectores. Aylwin precisó que su gobierno promoverá la anulación de la amnistía de 1978 que perdonó a los violadores de los derechos humanos durante los primeros cinco años, lo cual perfila una complicación dada la falta de mayoría parlamentaria. La decisión de Aylwin de ratificar en sus cargos a jefes militares no ha sido muy bien recibida por muchos de los partidos de la concertación. Ver *El Día*, 15 y 16 de dic. 89 y 7 de enero 1990.

¹⁸ Vío, Víctor “¿Cómo va Pinochet con su autoculto a la personalidad?” *El Día*, 23 de marzo de 1989, p. 13.

¹⁹ El abogado, de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica, Roberto Garretón, denunció que desde 1973 el gobierno militar había dictado 123 leyes secretas de la envergadura de la que creó a la Dirección Nacional de Inteligencia, la policía secreta de Pinochet, hasta el aumento de plazas en el ejército, fondo de abastecimiento, equivalencias de grados, ascensos y rentas para militares.

²⁰ *Excelsior*, 2 de octubre de 1989, pp. 2 y 36.

dos formas de ver el problema: es efectivo el crecimiento macroeconómico, pero el costo social ha sido inmenso: 44 por ciento de los chilenos viven en el nivel de pobreza absoluta y con graves problemas de desnutrición, hacinamiento, delincuencia y otros que ya se habían superado.

Durante estos últimos 16 años los niveles de vida se contrajeron respecto a los que privaban hace 15 o 20 y ello nos dice que a las mejoras hay que verlas en esa perspectiva. Recientemente Pedro Vuskovic señaló que la CEPAL respalda el modelo económico de Pinochet al omitir o subestimar en la ponderación de los resultados, una perspectiva de tiempos más amplios y su significado para las diferentes capas de la sociedad.²³ A más, es necesario señalar las debilidades intrínsecas de un modelo que hace depender la economía chilena por completo de los vaivenes de las economías centrales como lo ha notado Nudelman²⁴.

No en vano a Hernán Büchi, excandidato presidencial, exministro de Hacienda y pieza clave del actual modelo económico se le llama "Atila" pues "donde pone sus pies no vuelve a crecer el pasto": arrasó con todo el Estado chileno, todo lo privatizó, hizo cuanto pudo para dejarlo todo amarrado. "Pasará a la historia como el ministro del hambre, que ha mantenido a más de 5 millones de seres humanos en la extrema pobreza".²⁵ Aunque claro, un 8 por ciento —un millón de personas— se han beneficiado de este modelo —pues nunca habían sido tan ricas— por lo que son un reducto de apoyo para los sectores vinculados con el periodo dictatorial (Büchi obtuvo un 29.40 por ciento de la votación).

Otro negro nubarrón que pesa sobre el proceso de transición a la democracia, es el de la supuestamente exitosa negociación de la deuda externa (lograda gracias a Büchi) una verdadera bomba de tiempo que se activará debido a que a partir de 1991 el país deberá rembolsar 1 553 millones de dólares por concepto de amortizaciones de la deu-

da (frente a los 617 millones de dólares de 1989).

También desde 1991 las remesas de utilidades de transnacionales aumentarán significativamente pudiendo alcanzar los 1 100 millones de dólares anuales frente a los 310 millones de dólares durante 1988. Los intereses aumentarán en 3% a partir de 1990.²⁶

Además de que la situación puede bloquear toda posibilidad de desarrollo, se plantea también, según los autores citados, un problema de soberanía nacional toda vez que la reducción de la deuda se ha logrado mediante la conversión de deuda por capital, por medio de lo cual se han transferido tanto la propiedad como el control de la gestión de importantes empresas y bancos hacia consorcios transnacionales. ¿Puede haber opciones?

Se dice que la izquierda, a pesar del papel fundamental que desempeñó en esta coyuntura, no ha sido capaz de erigirse en una opción autónoma, no tan subordinada a la Democracia Cristiana. Es claro que las tareas actuales demandan la unidad de la oposición y no se trata de romper la unidad pero la izquierda tiene que reconstruirse²⁷ y ahora va a tener un contexto más favorable como para ser un factor determinante en la profundización de la democracia.²⁸

Los próximos cuatro años serán definitorios para la transición democrática en Chile y como en los otros casos hay mucho en juego. El reto va a ser sin duda el profundizar la democracia sin caer en situaciones tan caóticas y tensas como las que atraviesan los otros países del área, sin caer tampoco en una formalización del proceso democrático.

²⁶ Díaz, Alvaro, Marín, Gustavo y Navarro, Leonardo "Para Chile, la dependencia de hoy se llama deuda externa. *El gallo ilustrado* núm. 1420, suplemento de *El Día*, 10 de septiembre de 1989, p. 22.

²⁷ Según Patricio Rivas, vicepresidente del Partido Amplio de Izquierda Socialista, PAIS, la izquierda chilena actual enfrenta el reto histórico de su reconstrucción, pues está reducida a un 25 por ciento de lo que fue en 1973. *Unomásuno*, 15 de octubre de 1989, p. 31.

²⁸ Un dato relevante es la reunificación del Partido Socialista luego de diez años de división (en el periodo más crítico llegaron a existir 16 grupos con el nombre de PS) en él Clodomiro Almeyda quedó como presidente y Jorge Arreta como secretario general. Se perfila así como la más importante fuerza de izquierda y la segunda en el próximo gobierno.

²³ *Excelsior* 3 de enero de 1990 p. 2.

²⁴ Nudelman, P "Chile: la economía en el plebiscito. *El Día*, 4 de septiembre de 1988, p. 12.

²⁵ Vío, Víctor "Se llama Hernán y se tiñe el flequillo: Pinochet tiene un hombre. *El Día*, 5 de abril de 89, p. 14.